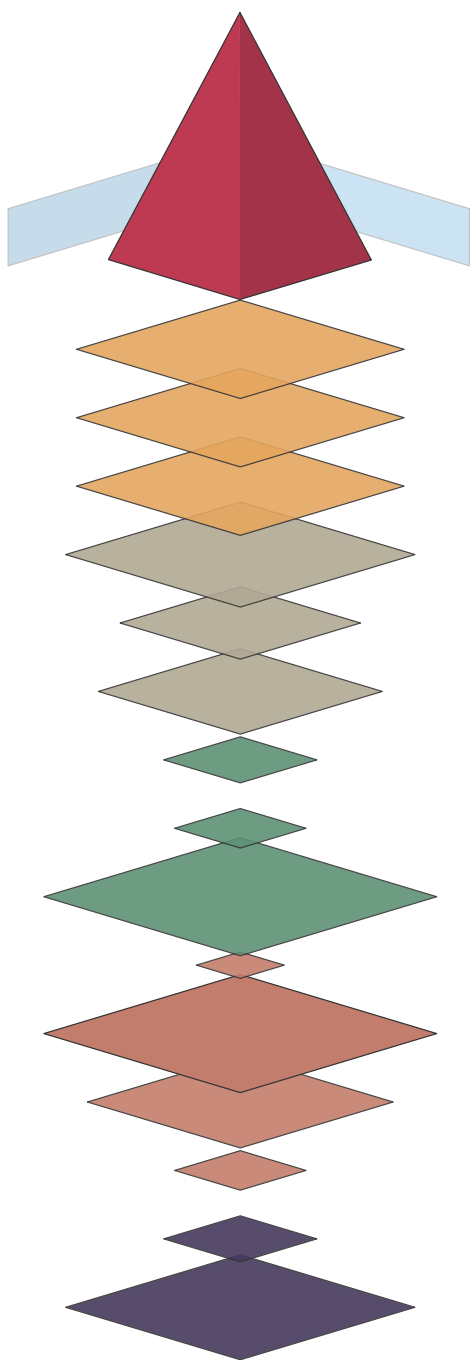




VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)



6,72

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

24.º de 193 países

8.º de 35 países americanos

5.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 6,03

TRATA DE PERSONAS 7,50

TRÁFICO DE PERSONAS 7,50

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 7,50

TRÁFICO DE ARMAS 8,00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 5,50

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 6,50

DELITOS CONTRA LA FLORA 3,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 3,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 9,00

COMERCIO DE HEROÍNA 2,00

COMERCIO DE COCAÍNA 9,00

COMERCIO DE CANNABIS 7,00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,00

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 3,50

DELITOS FINANCIEROS 8,00



ACTORES CRIMINALES 7,40

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 9,50

REDES CRIMINALES 5,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 9,00

ACTORES EXTRANJEROS 7,50

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 6,00



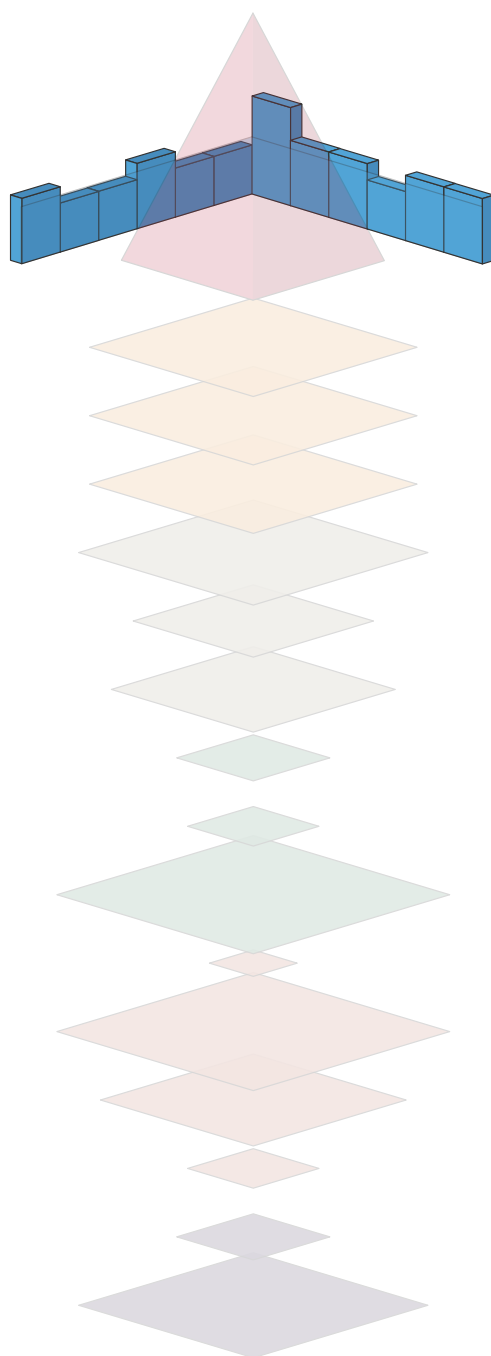
1,88

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)



1,88

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

185.º de 193 países

35.º de 35 países americanos

12.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	2,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	1,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	1,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	3,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	2,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	1,50
PREVENCIÓN	2,00
ACTORES NO ESTATALES	2,00



6,72

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 6,03



ACTORES CRIMINALES 7,40



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Venezuela sigue siendo un importante centro de trata de personas, donde se explota tanto a víctimas nacionales como extranjeras. Las mujeres son especialmente vulnerables, a menudo explotadas sexualmente en los países latinoamericanos que han acogido a refugiados venezolanos. Las actividades delictivas se ven facilitadas por la falta de control de la Policía y por la complicidad de las autoridades migratorias, los capitanes de barcos y las mafias que operan en las fronteras. Se ha denunciado la participación de venezolanos en trabajos forzados y explotación sexual en la producción de cocaína en la región colombiana del Catatumbo.

El país es una fuente de contrabando de personas, ya que los venezolanos utilizan los pasos ilegales controlados por grupos delictivos para salir del país. Como resultado, estas redes criminales han obtenido importantes beneficios económicos de su implicación en este delito. Los venezolanos con algunos medios optan por salir del país a través de agencias de viajes dirigidas por contrabandistas que llegan a casi todos los países de América Latina. El transporte por tierra hasta Chile implica sofisticadas estructuras delictivas transnacionales y las víctimas han denunciado haber sido abandonadas en su camino a través de inhóspitas zonas desérticas. Las actividades de contrabando de personas también tienen lugar en la costa venezolana, especialmente para transportar personas a Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y Bonaire, y muchas de estas embarcaciones se hunden durante la travesía. La crisis humanitaria en Venezuela sigue obligando a la gente a huir.

La extorsión y los cobros ilegales por protección están muy extendidos en Venezuela y los llevan a cabo las redes criminales. Estas actividades prevalecen en zonas bajo el control o la influencia de grupos delictivos, como las fronteras de las provincias de Arauca y Apure, las zonas comerciales de Caracas y Zulia y las zonas mineras, donde los pequeños mineros se ven obligados a pagar a los grupos armados un porcentaje del oro que extraen. La extorsión también se lleva a cabo mediante falsos secuestros, realizados desde las cárceles mediante llamadas telefónicas. Los venezolanos objeto de contrabando son extorsionados en múltiples ocasiones durante su viaje al país de destino, incluido el pago con dinero, bienes o favores sexuales. Los indígenas de Bolívar sufren extorsiones por parte de grupos paramilitares. A pesar de los esfuerzos para combatir la extorsión, a las víctimas a menudo no les queda más remedio que acceder a las exigencias de los delincuentes.

TRÁFICO

Las armas ilegales están muy extendidas en Venezuela y la corrupción gubernamental desempeña un papel importante en su circulación. La mayoría de las balas de las bandas proceden del fabricante estatal de armas de fuego y algunos miembros de las fuerzas de seguridad venden sus armas en el mercado negro. La falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno y los incentivos de los funcionarios para incautar y destruir armas han creado un círculo vicioso, en el que los agentes de la Policía venden a los delincuentes las armas incautadas. En este mercado, las balas se han convertido en el artículo más rentable y las bandas las utilizan indiscriminadamente como signo de estatus. Las armas ilícitas también prevalecen en el sistema penitenciario y son utilizadas por diversos grupos no regulados, lo que genera inseguridad y delincuencia. Cabe destacar que las rutas procedentes de Venezuela, especialmente a través de Norte de Santander y Arauca, se han convertido en importantes vías de entrada de armamento ruso y europeo en Colombia.

El comercio de mercancías falsificadas está muy extendido en Venezuela, donde la crisis económica ha impulsado la producción y la venta de productos falsificados. Al menos una cuarta parte del mercado del país se compone de productos falsificados, desde ropa y electrónica hasta productos farmacéuticos y alimenticios. También se han detectado franquicias falsas de marcas famosas, con establecimientos comerciales que infringen los derechos de propiedad intelectual y ofrecen servicios abiertamente. En el país han aumentado los medicamentos falsificados procedentes de China, Cuba y Rusia, que se introducen de contrabando a través de las fronteras de Brasil y Colombia.

El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales también es habitual en Venezuela, sobre todo debido a la inflación de los precios y a la crisis económica. El comercio ilegal procede principalmente de la frontera entre Venezuela y Colombia, donde los precios son considerablemente más baratos. Durante el periodo en el que las fronteras entre Colombia y Venezuela estuvieron cerradas, el comercio ilegal de productos casi se triplicó, beneficiando a los mercados criminales. Esta frontera está llena de pasos/trochas ilegales, controlados por mafias. Estos cruces se utilizan para entrar en Venezuela con productos sujetos a impuestos especiales, como bebidas alcohólicas y productos del tabaco. El contrabando de tabaco aumentó exponencialmente y representa aproximadamente una cuarta parte del mercado venezolano.

MEDIOAMBIENTE

Se registró un aumento de los delitos contra la flora en Venezuela, debido en gran parte a la crisis económica del país y a la falta de control gubernamental. La crisis energética

también ha provocado un aumento de la tala ilegal de árboles para leña, lo que ha dado lugar a un mercado local en el que la gente tala árboles de zonas protegidas para abastecerse o vender la madera en la calle. Además, existe una demanda de madera por parte de países externos, como EUA y China, así como de países europeos. Organizaciones ecologistas de Colombia han denunciado exportaciones ilegales de madera a Venezuela, debido a los altos precios en los países vecinos.

El tráfico de animales salvajes y el consumo de carne de animales silvestres también han aumentado en Venezuela, sobre todo en el delta del Orinoco, debido a los contrabandistas procedentes de los países vecinos. Esto ha amenazado gravemente a ciervos, manatíes y báquiros, que son consumidos por ciudadanos extranjeros. Los lugareños, que luchan por sobrevivir a la crisis económica y humanitaria, también cazan animales en peligro de extinción, como loros cabeza amarilla, cardenalitos y guacamayos rojos y azules. El hambre en el país también ha incrementado la caza furtiva de delfines, flamencos rosas y tortugas marinas para el consumo local. El mercado de productos de origen animal está regido predominantemente por agentes nacionales, pero también han entrado en él contrabandistas que responden a la demanda local e internacional.

El contrabando de oro y petróleo es un problema omnipresente en Venezuela, impulsado por años de corrupción y de mala gestión de la empresa petrolera estatal, así como por las sanciones de Estados Unidos. La corrupción está muy extendida en la industria petrolera del país, con funcionarios estatales implicados en fraudes, sobornos y estafas monetarias que han provocado pérdidas de miles de millones de dólares. La consiguiente escasez de gas y de petróleo en el país ha convertido a Venezuela en destino del contrabando de petróleo. La disminución de la producción de petróleo también ha obligado al régimen a compensar las pérdidas con los recursos minerales situados en el Arco Minero del Orinoco (AMO). Actualmente, de todos los países que comparten la selva amazónica, Venezuela es el que tiene más puntos de minería ilegal identificados, con pistas de aterrizaje clandestinas que se utilizan para enviar minerales, especialmente oro, fuera del país. La proliferación de pequeñas minas ilegales en el AMO ha creado una compleja red de criminalidad. Grupos armados no estatales y bandas brasileñas operan directamente en las minas o extorsionan a los pequeños mineros para que los dejen trabajar, lo que ha provocado disputas entre estos grupos, que han desembocado en un aumento de la violencia y en muchas muertes en los últimos años.

DROGAS

Aunque el Gobierno venezolano ha informado de una disminución de las incautaciones de heroína, no se sabe con certeza si esta reducción se debe a un menor tráfico de drogas, a un menor consumo o a la falta de control gubernamental. Sin embargo, Venezuela sigue siendo un

país importante para la producción y el tráfico de cocaína, con funcionarios de alto rango que facilitan el tráfico de drogas. El río Amazonas es una ruta clave del narcotráfico, que incluye a Colombia, Venezuela y Brasil, el principal país para los envíos de droga a Europa. Las organizaciones delictivas utilizan lanchas rápidas para transportar cocaína a las islas del Caribe y los venezolanos proporcionan mano de obra barata para cosechar, procesar y trasladar los cargamentos.

La marihuana disponible en el mercado local tiene altos niveles de THC y, durante el encierro de la COVID-19, el precio del cannabis aumentó drásticamente, superando el ingreso promedio de la población, lo que llevó a un mercado restringido. Se ha informado de la existencia de plantaciones de marihuana en varias partes del país, para el consumo local y la exportación a pequeña escala a las islas caribeñas de habla inglesa. Es posible que la marihuana siga las mismas rutas que la cocaína desde Colombia. Venezuela no tiene una participación significativa en el comercio transnacional de drogas sintéticas. Sin embargo, la venta de diversas drogas sintéticas, incluidas la metanfetamina y la queratina, está aumentando en los mercados locales. Actualmente no hay indicios de que se vendan opioides sintéticos.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

La ciberdelincuencia en Venezuela ha ido en aumento a lo largo de los años, con un incremento de los ataques de protocolo de escritorio remoto y de malware. Casos notables incluyen el hackeo de la inteligencia militar venezolana, que filtró información sobre agentes de Hezbolá en el país, así como de individuos implicados en el tráfico de drogas y de armas y en el blanqueo de dinero. Los medios de comunicación digitales y las organizaciones de derechos humanos han sido cada vez más blanco de estos delitos en los últimos años. Los ataques de denegación de servicio se atribuyen a menudo a la cobertura mediática de escándalos de corrupción, lo que hace sospechar que están patrocinados por el Estado.

DELITOS FINANCIEROS

El mercado de los delitos financieros se ha expandido en Venezuela en los últimos años, con un aumento particular de las actividades fraudulentas en línea a través de las redes sociales. Las víctimas han sido objeto de correos electrónicos falsos del sistema administrativo y de migración, así como de otras plataformas gubernamentales. La publicación de los Papeles de Pandora arrojó luz sobre la implicación de altos funcionarios venezolanos en cuentas en paraísos fiscales y actividades ilegales, como la corrupción en la compañía petrolera nacional. Muchas personas del país también han sido víctimas de esquemas Ponzi.

La prevalencia de actividades financieras informales en Venezuela, como la compraventa de divisas y las transferencias

de moneda extranjera y local, ha creado un entorno propicio para tramas fraudulentas de diversa envergadura. Además, el aislamiento del país del sistema financiero mundial ha dado lugar a transacciones internacionales opacas, que implican grandes transferencias de efectivo, lo que ofrece oportunidades para la apropiación indebida y el fraude a gran escala.

ACTORES CRIMINALES

El Estado venezolano está plagado de actividades delictivas y, al parecer, altos cargos colaboran con organizaciones criminales para llevar a cabo diversas operaciones ilegales, como el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. También se acusa a las élites políticas de Venezuela de utilizar la petrolera estatal para blanquear miles de millones de dólares en beneficio propio y de otros miembros del Gobierno.

En cuanto a los grupos mafiosos, las «megabandas» controlan el territorio, poseen armamento pesado y tienen una jerarquía clara. La zona sur del país es la más afectada, ya que guerrillas y bandas luchan por el control del territorio, el narcotráfico y la extracción de oro. Estos actores también se dedican a la extorsión y tienen un importante acceso a las armas. Controlan el sistema penitenciario y coordinan las operaciones delictivas dentro de las cárceles. Aunque las fuerzas de seguridad venezolanas lanzaron varias operaciones que se saldaron con la muerte de importantes líderes, estos ataques solo se han dirigido contra bandas que han atraído la atención nacional por su violencia, en lugar de formar parte de una estrategia global.

Los actores extranjeros, en particular los disidentes colombianos de las FARC y de otros grupos guerrilleros, han utilizado durante mucho tiempo a Venezuela como base para sus operaciones. La situación criminal en Venezuela es compleja e implica una mezcla de actores internos y extranjeros con diferentes intereses, que solo se alinean parcial y temporalmente. Los grupos delictivos colombianos son uno de los actores dominantes en los principales

mercados delictivos de Venezuela, como el tráfico de cocaína, petróleo y oro y el contrabando de personas. Los grupos delictivos brasileños también están aumentando sus intereses en el sur de Venezuela y grupos de mineros armados brasileños invaden zonas fronterizas ricas en oro en los estados de Bolívar y Amazonas.

En cuanto a las redes criminales, se dice que milicianos experimentados iraníes y libaneses han estado entrando en el país para entrenar a los «Colectivos» (grupos armados respaldados por el Gobierno, que dicen proteger la revolución bolivariana) en contra-inteligencia y represión de protestas sociales, a cambio de pasaportes y de documentación legal, para poder expandir sus operaciones por toda América Latina. Los Colectivos controlan el mercado negro de alimentos regulado por el Gobierno en algunos barrios y gozan de impunidad, ya que las autoridades de alto nivel dan órdenes directas para sus actividades. Estos grupos han sido acusados de emplear la violencia contra los opositores al régimen durante operaciones contra la delincuencia, así como de estar implicados en el tráfico local de drogas.

Los actores del sector privado de la industria de la extracción de oro en Venezuela colaboran activamente con las redes delictivas. Estos actores, incluidas las empresas procesadoras de oro, trabajan conjuntamente con grupos delictivos para obligar a los mineros a venderles directamente el oro que extraen para su posterior refinado o procesamiento. Además, los sindicatos de los sectores de la construcción, el petróleo y la minería están implicados en actividades delictivas. En lugar de representar los intereses de los trabajadores, estos pseudosindicatos han estado extorsionando a los trabajadores de sus sectores para asegurarles puestos de trabajo. Por parte de la patronal, extorsionan a gerentes y jefes de diferentes proyectos u obras, amenazándolos para que solo contraten a las personas que ellos indican o para que compren materiales a determinadas empresas. Las disputas entre los pseudosindicatos provocan varios asesinatos al año, muchos de ellos en forma de sicariato.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Venezuela es ampliamente considerada un Estado frágil, que actualmente se enfrenta a graves crisis económicas y políticas, que han conducido a una gobernabilidad y una legitimidad extremadamente bajas y han afectado las necesidades humanas básicas de los venezolanos. Los ingresos del país han disminuido sustancialmente, debido a las sanciones estadounidenses, el colapso económico y un descenso sin precedentes de la producción de petróleo y

gas, lo que ha obligado al Estado a depender de fuentes de ingresos alternativas. El régimen ha desinstitucionalizado sus fuerzas militares, transformándolas en una fuerza de resistencia descentralizada, lo que ha dado lugar a la proliferación de otras entidades armadas aliadas del régimen. El Estado no ha priorizado el desmantelamiento de los grupos del crimen organizado que se dedican a actividades delictivas y no existe voluntad política para hacerlo. Desde el 2014, el régimen venezolano no publica

sus datos macroeconómicos, lo que obliga a las ONG y a los Gobiernos extranjeros a registrar cualquier dato relacionado con la situación del país. La falta de transparencia y de rendición de cuentas se manifiesta en la ausencia de elecciones justas y libres, de apertura y de leyes y marcos electorales justos. La reelección del presidente Nicolás Maduro fue ampliamente considerada fraudulenta, lo que llevó al no reconocimiento de su Gobierno por parte de muchos países y a la creación de un Gobierno de oposición paralelo, liderado por Juan Guaidó. Sin embargo, la credibilidad de este último también se ha visto empañada por casos de corrupción, ya que no estaba preparado para gestionar los fondos públicos con responsabilidad. Los altos niveles de corrupción, delincuencia e impunidad en el país han llevado a su normalización.

Venezuela ha suscrito acuerdos internacionales sobre delincuencia organizada y tiene tratados de extradición con varios países. Sin embargo, no cumple sus obligaciones internacionales y se niega sistemáticamente a recibir a misiones internacionales de investigación sobre violaciones de los derechos humanos. Además, el país se ha convertido en un refugio seguro para los delincuentes buscados por INTERPOL, ya que los fugitivos se esconden allí. El marco jurídico penal de Venezuela no ha experimentado cambios significativos y la falta de independencia judicial ha fomentado la criminalidad y las violaciones de los derechos humanos. La legislación nacional contra el crimen organizado no se ha implementado de manera efectiva.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Venezuela carece de independencia, lo que contribuye a la represión de los opositores por parte del Gobierno y a graves violaciones de los derechos humanos. Según los informes, los actores políticos dan órdenes a los jueces y los que se niegan suelen ser intimidados y vilipendiados. El fiscal general eliminó el proceso competitivo de selección de fiscales, lo que dio lugar a que jueces y fiscales fueran colocados por funcionarios de alto rango. El sistema penitenciario se enfrenta a problemas notables, como la corrupción, la escasa seguridad, infraestructuras deficientes, el hacinamiento, el personal insuficiente y guardias mal formados. Los delincuentes del sistema coordinan actividades ilegales fuera de los muros de la prisión, como secuestros, extorsión y tráfico de drogas.

La falta de control de Venezuela sobre sus territorios ha obligado al Gobierno a depender de grupos armados no estatales y de militares corruptos para mantener el control y la autoridad en esas zonas. Aunque el Gobierno ha reprimido a algunos grupos ilegales y ha recuperado el control de los territorios en disputa, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de torturas y ejecuciones extrajudiciales, lo que agrava el problema de la violencia y la desconfianza de las comunidades con respecto a la Policía. La situación dentro de las fuerzas de seguridad es calamitosa, con una

corrupción generalizada, una seguridad deficiente y unas infraestructuras deficientes, que contribuyen a agravar los problemas.

La porosidad de las fronteras venezolanas también ha propiciado la proliferación de actividades ilegales por parte de grupos criminales. Desde el comienzo del régimen de Chávez, el Estado venezolano ha acogido a las guerrillas colombianas como aliados ideológicos y como una fuerza militar que podría ayudar al Gobierno a controlar las fronteras del país y a disuadir una invasión de Estados Unidos o de Colombia. Sin embargo, el Estado ha perdido el control de su expansión y la minería ilegal y el narcotráfico han florecido en muchos territorios. Algunas provincias han sido controladas de facto por grupos criminales que luchan por los mercados criminales transnacionales. La falta de presencia estatal, así como la disposición de las autoridades locales a aceptar sobornos, complican aún más la situación. A pesar de los esfuerzos del Gobierno venezolano por recuperar el control, el resultado sigue siendo incierto.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El blanqueo de dinero sigue siendo un problema importante en Venezuela. A pesar de algunas ligeras mejoras, las vulnerabilidades del sistema financiero, el amplio mercado de divisas, la circulación no regulada de dólares y la falta de transparencia siguen obstaculizando cualquier iniciativa estatal. El narcotráfico, la corrupción y el contrabando de mercancías se reconocen como fuentes de fondos ilícitos y las sanciones internacionales refuerzan el alcance del blanqueo de dinero en el país. La situación geográfica de Venezuela, la escasa supervisión y aplicación de la ley y la limitada cooperación bilateral también contribuyen a la generalización de los abusos financieros. Las sanciones internacionales han llevado a Venezuela a intentar vender cada vez más su petróleo a través de mercados grises en el extranjero.

Varios factores han debilitado la capacidad de regulación económica de Venezuela, entre ellos las sanciones financieras, el descenso de los salarios y de la economía formal, la corrupción y la falta de un Estado de derecho. Las sanciones financieras han llevado a la economía a depender de transacciones grises, el dinero en efectivo y el trueque para eludirlas y evitar los sistemas financieros internacionales. La destrucción de los salarios y de la economía formal ha empujado a una parte importante de la población a dedicarse a actividades informales e ilegales, desanimando aún más a los empresarios a emprender negocios. Además, la lentitud del proceso de pagos del Gobierno es un obstáculo considerable para la inversión. Aunque se espera que el país crezca en los próximos años, está lejos de alcanzar los niveles económicos experimentados hace décadas, ya que el sector privado ha sido prácticamente desmantelado por el Estado. Venezuela sigue teniendo la tasa de inflación más alta del mundo y las nuevas medidas económicas, destinadas

a fomentar el uso del bolívar, demuestran que las decisiones económicas siguen siendo políticas y no técnicas. La crisis económica ha afectado gravemente las condiciones de vida de los venezolanos, ya que casi toda la población vive por debajo del umbral de pobreza y se enfrenta a la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El sistema de justicia venezolano sigue adoleciendo de deficiencias y carece de independencia, lo que vulnera los derechos de las víctimas, a pesar de las recientes reformas de la ley de protección de las víctimas introducidas por la Asamblea Nacional. En algunos casos, los jueces no han protegido a las víctimas de torturas, al ordenar su devolución a los centros de detención donde presuntamente fueron torturadas. El Gobierno venezolano no ha proporcionado apoyo a las víctimas de la trata, ya que no existen refugios especializados para ellas. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil y religiosas ofrecen asistencia a estas víctimas. El alto nivel de desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y las fuerzas de seguridad hace que cualquier tipo de apoyo a víctimas y testigos sea ineficaz o incluso inexistente.

La relación entre el régimen venezolano y los medios de comunicación independientes, así como con las ONG, ha sido débil, ya que existe una tolerancia limitada a las críticas. El régimen ha implementado un decreto que obliga a las ONG a registrarse y a proporcionar información detallada sobre su financiación, lo que se considera un intento de silenciar a las organizaciones independientes que han estado documentando y denunciando la crisis de derechos humanos en el país. Las ONG locales están sometidas a escrutinio y algunas han sido acusadas de ser grupos terroristas e infiltrados de agencias de inteligencia extranjeras, lo que ha provocado detenciones, torturas y desapariciones de su personal. El Gobierno también ha despojado a las emisoras de radio y de televisión críticas de sus frecuencias de emisión, ha bloqueado sus redes sociales y ha llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de violencia contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Ha aplicado leyes y reglamentos represivos, que restringen el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. Los periodistas son frecuentemente amenazados o golpeados durante las elecciones, sin ninguna garantía de seguridad para ellos.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.